

# Cambios políticos recientes y disputas estratégicas en las relaciones de América Latina con Estados Unidos

Darío Salinas Figueredo

*dario.salinas@ibero.mx*

Doctor en Sociología.

Profesor-investigador emérito de la Universidad Iberoamericana, México.

Yissel Santos González

*yisselsantos87@gmail.com*

Becaria CONACYT en el Doctorado en Ciencias Sociales y Políticas  
de la Universidad Iberoamericana, México.

## Resumen:

Este estudio aborda el juego de tendencias y contratendencias conservadoras en el actual escenario político regional. Al hacerlo, sostiene que el impulso transformador del progresismo se enfrenta a severas amenazas y notorias reversiones que han profundizado los niveles del conflicto. Sin embargo, la disputa por la conducción de los procesos políticos se encuentra abierta. Ninguna experiencia se desenvuelve al margen de las políticas estadounidenses. Su incidencia es decisiva en algunos casos, como en Venezuela o Cuba, a tal punto que ponen en tensión el frágil equilibrio de las relaciones hemisféricas y geopolíticas. En ese encuadre, el actual gobierno de México no llega al escenario latinoamericano, como a veces se afirma, después del llamado «ciclo progresista». Por el contrario, es parte de ese denso flujo transformador, frente al modelo de sociedad neoliberal en descomposición que, a pesar de la crisis profunda que le aqueja, sigue funcionando como si tuviera una salud de roble.

**Palabras clave:**

Hegemonía, conflictos políticos, progresismo, relaciones hemisféricas, política intervencionista, neoliberalismo, relaciones internacionales.

**Abstract:**

*This study addresses the game of trends and conservative counter-tendencies in the current regional political scenario. In doing so, it is argued that the transformative drive of progressivism faces severe threats and notorious reversals that have deepened the levels of conflict. However, the dispute over the conduct of political processes is open. No experience unfolds outside of US policies. This incidence is decisive in some cases, as in Venezuela or Cuba, to such an extent that they put in tension the fragile balance of hemispheric and geopolitical relations. In that framework, the current government of Mexico does not reach the Latin American stage, as is sometimes affirmed, after the so-called «progressive cycle». On the contrary, it is part of this dense transforming flow, in the face of the model of a decomposing neoliberal society that, despite of the profound afflictive crisis it continues functioning as it were a strong health system.*

**Keywords:**

*Hegemony, political conflicts, progressivism, hemispheric relations, interventional policy, neoliberalism, international relations.*

**El punto de vista analítico**

Desde América Latina y el Caribe, en medio de un complejo juego de tendencias y poderosas contratendencias conservadoras en el escenario reciente, puede plantearse que se han profundizado los niveles del conflicto y la disputa por la conducción de los procesos políticos. Aunque la realidad hemisférica no ignora que la tradicional política estadounidense hacia la región se encuentra severamente cuestionada, desde el punto de vista de su credibilidad, los hechos sugieren la presencia de una reconfiguración de fuerzas que le favorecen y cuya vinculación con los objetivos estratégicos del capitalismo parecen haberse reactualizados.

El impulso transformador del progresismo se enfrenta a notorias reversiones. Esta idea, inserta en la trayectoria de una discusión inconclusa, no es antojadiza. Una sucesión de fenómenos adversos la pueden avalar,

entre los que destacan la derrota del Frente para la Victoria en Argentina y la del Gran Polo Patriótico para las parlamentarias en Venezuela, respectivamente, en el 2015. La pérdida en Bolivia del referendo para la reelección de Evo Morales y el *impeachment* golpista en Brasil que destituye a la presidenta Dilma Rousseff, ambos episodios ocurridos durante 2016. En Colombia, ese mismo año, el plebiscito convocado para validar los acuerdos de paz no resulta airoso para quienes bregaron por el fin del conflicto armado. Poco después, la sorpresiva traición política, en Ecuador, del candidato presidencial de la Alianza País después de los comicios presidenciales de 2017 y la derrota electoral del Farabundo Martí en El Salvador en enero de 2019. Este cuadro adquiere su punto de mayor gravitación con la crisis en Venezuela, agravada sistemáticamente por las mismas hostilidades que comenzaron a deteriorar las condiciones construidas hacia la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Sus alcances tendenciales ponen en peligrosa tensión el frágil equilibrio de las relaciones hemisféricas y geopolíticas.

La afirmación de que la política norteamericana frente al proceso global del capitalismo se ve afectada por una crisis de hegemonía ya resulta casi trivial. Sus expresiones han dado lugar a una importante línea de reflexión.<sup>1</sup> Sin embargo, actualmente el asunto de fondo no está precisamente en esa constatación, sino en la necesidad de conocer mejor la capacidad disponible para reorientar su deteriorado liderazgo. Mientras tanto, parece más estimable suponer que nos encontramos ante nuevas condiciones del poder hegemónico. Si esto es así, y para observar sus implicaciones en la región, es importante el ejercicio de distinguir entre las definiciones que van articulando la política bajo la administración republicana y las posibilidades reales de instrumentar sus objetivos estratégicos en el dinámico balance de fuerzas a nivel global.<sup>2</sup>

### Los cambios políticos: dinámicas y límites

El panorama político y social que se desprende de la historia actual está lejos de las esperanzas democráticas y transformadoras que

<sup>1</sup> Noam Chomsky: *Hegemonía o supervivencia. La estrategia imperialista de Estados Unidos*, Ediciones B, S.A., Barcelona, 2016.

<sup>2</sup> Darío Salinas Figueredo: «América Latina y el Caribe ante los desafíos de la crisis global», en: M. N. Ruiz Uribe (coord.): *América Latina en la crisis global. Problemas y desafíos*, México Instituto Universitario Internacional/CLACSO/ALAS/Universidad de Tijuana, México, 2013.

movilizaron a millones de ciudadanos. Desestabilizar procesos, retrotraer los logros antineoliberales y derrotar la marcha de las transformaciones democráticas y populares pautan el sentido de las trincheras políticas e ideológicas conservadoras, desde las cuales se proyectan en los espacios nacionales los planes de la derecha que cuentan con la disposición extrema de la política estadounidense. Es este el escenario de confrontación y de disputas en el que se despliegan dinámicas conexas con lo regional y hemisférico, reordenando a su turno las piezas de los recursos multilaterales. Reexaminar este escenario actual resulta ineludible. En ese ejercicio la mirada reflexiva sobre el pasado reciente es clave en la disputa por el presente.

La izquierda, tal vez midiendo desde un comienzo su propia fuerza, valorando ponderadamente la capacidad del adversario, buscó una acumulación prudente en la construcción de un proyecto de cambio. Desde el primer triunfo electoral de Hugo Chávez hasta prácticamente toda la primera década del presente siglo, podemos encontrar una línea continua de iniciativas, pugnas y políticas encaminadas desde las reformas antineoliberales. En su núcleo de articulación transformadora no fue un objetivo la recuperación de los bienes nacionales incluyendo decisiones de nacionalización, estatización y la transformación de las relaciones estructurales de la propiedad. En la medida en que esto fue así, el resultado político es parte del carácter que asume la evolución del progresismo.

La problemática hace referencia a la dialéctica de la acumulación en cuanto a la posibilidad de construcción de una fuerza con sentido estratégico. Lo que prevaleció fue la defensa de la justicia social, la restauración de los derechos sociales y el desarrollo de una política distributiva importante, con lo cual todas las experiencias estuvieron marcadas por la decisión general de devolverle al Estado un papel de mayor centralidad desde el punto de vista de la regulación frente a la preponderancia del mercado. La pugna entre la hegemonía del espacio mercantil, habida cuenta de sus grandes intereses y la reconstitución de la esfera pública, dibujó la tónica de la política. Por esa senda, los procesos políticos se fueron distanciando, en grados diversos, de las políticas neoliberales en cuyo desarrollo concreto unas experiencias avanzaron más que otras. Con todo, la dinámica del cambio político se había incubado, proyectando sus benéficas tendencias hacia un cuestionamiento importante de aquellas concepciones conservadoras de integración, seguridad y cooperación hemisféricas.

El tránsito, acorde con este itinerario general de lucha, ocurrió a través de la reapropiación social de la opción electoral como camino para legitimar el contenido de las transformaciones. Los resultados disponibles, con el beneficio del tiempo transcurrido, contienen insumos importantes para valorar los alcances y a la vez los límites de los logros dentro de la institucionalidad vigente. Lentamente fue quedando un saldo que dice relación a la distinción entre la corrección de las políticas neoliberales y la permanencia prácticamente intacta del poder político en sus fundamentos estructurales e institucionales, lo cual abre interrogantes de significación sobre el sujeto político desde el ángulo de su capacidad estratégica para impulsar y defender un proyecto alternativo.

La derecha, en sus diversas expresiones, ha sabido diagnosticar las debilidades del progresismo, así como el peso específico de la izquierda en él, y en esa medida pudo frenar la evolución del proceso de transformación e incluso revertirlo. Pero no solo eso. Aunque hayan sido derrotadas electoralmente, siempre supieron mantener su accionar de clase desde la oposición. Sus fuerzas siempre han sabido manejar esa conjunción de capacidad y recursos del poder para bloquear la gestión del cambio promovida gubernamentalmente por el progresismo. Si esto fue así y frente a la hipótesis del desgaste de la política progresista, conviene preguntarse de qué estaba hecha esa política.

### **Notas críticas sobre un escenario regresivo**

Estas experiencias políticas, aunque sean diferentes en sus circunstancias específicas, pertenecen a una coyuntura de crisis del proceso de lucha pautado de un modo general por la impronta antineoliberal y del impulso de propuestas para la integración regional sin subordinación.<sup>3</sup> Desde estos ángulos de interés, la perspectiva nos coloca frente a la problemática de los niveles de confrontación.

Coincidente con el inicio de la administración de Barack Obama (2009), puede situarse el momento constitutivo que pauta el inicio de las reversiones políticas. Es decir, el desarrollo de una estrategia orientada a desmontar lo que se ha construido a partir de 1998, justamente cuando se produjo aquel primer triunfo electoral de Hugo Chávez en

<sup>3</sup> D. Salinas Figueredo (coord.): *América Latina: nuevas relaciones hemisféricas e integración*, UNAM-Universidad Iberoamericana, México, 2016.

Venezuela, bajo cuya benéfica tendencia se eligieron y hasta se reeligieron propuestas gubernamentales de corte antineoliberal. A contrapelo de los golpes tradicionales, de propinar derrotas sangrientas al movimiento popular para imponer dictaduras cívico-militares, con el derrocamiento de Manuel Zelaya en Honduras y Fernando Lugo en Paraguay, 2009 y 2012 respectivamente, se inauguraba un nuevo formato para instrumentar estrategias contrarrevolucionarias. Por esa misma senda, en Brasil se produjo en el 2016 la destitución de Dilma Rousseff mediante el montaje de un golpe de Estado parlamentario judicial mediático. En términos de los objetivos fundamentales en pugna, el fracasado golpe de 2002, contra la Revolución Bolivariana, fue asimilado por la derecha y la política estadounidense profundamente involucrada en el sentido de que la «vía tradicional» había perdido su eficacia.

A la cadena de abruptos reveses políticos y la rápida involución de las conquistas sociales, le siguen procesos de criminalización, judicialización, persecución e incluso de eliminación de dirigentes sociales. La amañada condena que truncó la candidatura de Lula, los procesos judiciales contra Rafael Correa y Cristina Fernández en curso, la construida orden de captura contra Jorge Glas o el asesinato de Berta Cáceres en Honduras son un ejemplo, entre otros, de la forma en que se despliegan combinadamente los nuevos recursos del giro conservador.

Este es el trasfondo que hay que estudiar para entender lo que subyace al debate que bajo la llamada «restauración conservadora» se ha desarrollado en la región,<sup>4</sup> y que no es otra cosa que el proceso en su fase de desacumulación de fuerzas del progresismo. Aquí se asoma un ángulo primordial desde el cual se puede visualizar la problemática que hace a la capacidad de defender los avances y el sentido de los cambios. La cuestión se dirige, antes que nada, a la valoración de aquella construcción de la conciencia en el desarrollo de los diversos momentos del proceso y el sujeto portador de esa conciencia en la lucha bajo invocaciones democráticas y populares de amplio espectro. A esto se añade el hecho comprobado de que ciertos comportamientos electorales en la región sugieren que las decisiones de votar no se relacionaron siempre con una voluntad de elegir, sino de castigar conductas políticas que generaron expectativas y luego frustraciones. Sirve de referencia

<sup>4</sup> A. Serrano Mancilla: *La huella invisible de la restauración conservadora*, CELAG, 2018. En: <https://www.celag.org/huella-invisible-restauracion-conservadora/>.

reflexiva, aunque no únicas, el resultado de los escrutinios de Chile en 2017 y de Argentina en 2015, cuando en ambas experiencias la mayoría social no pudo o no quiso conformar un entendimiento de unidad electoral en favor del progresismo.

La contraofensiva conservadora en curso no ignora este complejo entramado donde confluyen factores vinculados a la conciencia social, la organización de la política y, en definitiva, la capacidad de acumular fuerzas. Ellos avanzaron no solo porque tienen sus objetivos definidos y la disponibilidad de fuerzas estructurales, políticas, comunicacionales y aliados poderosos. Avanzaron en su contraofensiva porque pudieron hacerlo y la capacidad de las fuerzas progresistas no fue suficiente para impedirlo. La eficacia que logran en la disputa y la modificación de la balanza política se explica fundamentalmente a partir de las debilidades del progresismo.

Diversos y complejos son los factores comprometidos en esa disputa. De todos ellos, hay uno que puede considerarse entre los decisivos, porque reúne el complejo ámbito de las percepciones que compromete los niveles de la «conciencia posible» y que a la postre se traducen en comportamientos concretos. Colocado este registro de preocupación bajo cierta perspectiva, se puede pensar que la oleada del progresismo, que atraviesa actualmente un momento de reflujo, sugiere que el cambio antineoliberal avanza hasta donde la conciencia antineoliberal lo vino posibilitando.

Afirmación dinámica con la que de ninguna manera se minimiza la densidad de los desafíos que implica desmontar la hegemonía neoliberal. Su basamento teórico e ideológico no se encuentra solo en la economía. Por lo tanto, luchar contra sus políticas siendo importante no es suficiente. Su capacidad de enraizamiento es mucho mayor, toda vez que en la experiencia de nuestros países podemos constatar que ha permeado hábitos y costumbres, pensamientos, prejuicios y comportamientos, definiendo a la postre formas culturales de importantes capas de la sociedad, muchas de las cuales al beneficiarse del carácter redistributivo de las políticas sociales no necesariamente estaban comprometidas con un proyecto de transformación.

Desde el pensamiento crítico surgen desafíos importantes en la perspectiva de una mejor comprensión de la estructura de clases que ha propiciado el desarrollo de esta sociedad de mercado y la constelación ideológica que se ha ido conformando en coexistencia con la dinámica

de su complejidad. Hay segmentos sociales que pertenecen al mundo de los excluidos que votan por candidatos promovidos por la derecha, o estratos socioeconómicamente marginales cuyo imaginario colectivo fue alimentado por el espejismo del consumo o la desconfianza en la política predominante. Otros alegan abiertamente su disposición de incorporarse a la modernización neoliberal. En un examen más cuidadoso desde la sociología electoral, a esto se añade la preocupación por comprender mejor la recurrencia de la conducta abstencionista que afecta a porciones importantes del electorado latinoamericano, especialmente aquel grupo etario que integra a la juventud. Desde la experiencia de procesos progresistas la relación entre el «sentir» de la sociedad y la capacidad política para articular, convencer, convocar y sumar sigue siendo un asunto crucial. Cómo se produce la relación entre participación y representación en sistemas políticos históricamente excluyentes es una problemática relevante para la izquierda.

El manejo de los núcleos desde los cuales se mueven las expresiones de malestar o descontento constituye un desafío de proporciones insospechadas. Es un hecho, más que comprobado, que todo germen de desafección social con la política es estimulado por la derecha, sin desconocer que hasta el descontento puede ser provocado para luego culpar a los gobiernos progresistas por los efectos que ocasiona. Es exactamente allí donde su poderosa maquinaria comunicacional, instrumentada a través de portentosas y articuladas campañas nacionales e internacionales, se moviliza para deslegitimar y desestabilizar, aprovechando al máximo los errores e insuficiencias, que con enorme capacidad ha sabido capitalizar una vez conformada la situación que lo permita. Ejemplos significativos a este respecto, aunque no son los únicos, pueden ser rescatados de las experiencias recientes de Brasil, Venezuela, Chile, Argentina, Bolivia y Nicaragua.

Si algo va arrojando la experiencia de los procesos más avanzados es que el neoliberalismo es mucho más que un conjunto de políticas económicas y sociales.<sup>5</sup> Es mucho más que un conjunto de variables macroeconómicas. Desde los gobiernos electoralmente triunfantes y que se opusieron con diversos grados de radicalidad a ese modelo de sociedad, aplicaron políticas diferentes cuyo impacto ha logrado

<sup>5</sup> D. Harvey: *Breve historia del neoliberalismo*, trad. Ana Varela Mateos, Ediciones Akal, Madrid, 2007; J. Estay y otros: *El neoliberalismo y su crisis. Causas, escenarios y posibles desenvolvimientos*, Heinrich Böll Stiftung/Arcis/Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Santiago, 2012.



corregir de manera importante el contenido de las políticas. El positivo cambio que se introdujo en el sentido de la producción y en la esfera de la distribución ha generado una recuperación social significativa en el campo del acceso al consumo, lo cual aparece asimilado en términos de las conquistas en favor de los derechos sociales que conciernen a la condición ciudadana.<sup>6</sup> La dinámica, así como los componentes de sus luchas ha reactivado el papel de los movimientos, ampliando y profundizando su turno los ámbitos de su incidencia,<sup>7</sup> en una región donde el capitalismo se ha caracterizado por acumular históricamente problemas sociales no resueltos.

Donde hay demanda social desprotegida siempre hay un derecho que reivindicar. Sin ser la única, la experiencia de Brasil bajo los dos periodos del gobierno de Lula, a este respecto, puede considerarse paradigmática por sus extraordinarios logros sociales. Sin embargo, la relación entre estas políticas y el proceso de construir una ciudadanía con capacidad de articularse a la acción gubernamental deja interrogantes importantes sobre la consistencia del proceso, especialmente en el tramo en que se produjo aquella concertada dinámica que desembocó en la caída de Rousseff. No se ha podido observar en esa crítica coyuntura una disponibilidad movilizadora. Tampoco la capacidad para resistir el impacto del *impeachment*, y menos para evitarlo. No se puede olvidar que esta referencia tiene un asiento social de descanso: fueron un poco más de cincuenta y cuatro millones de electores brasileños, que en los escrutinios entregaron su confianza para que triunfara el gobierno, y que no tuvieron ante la regresión conservadora la capacidad de traducir ese *quantum* en una correlación activa y suficiente como para generar la respuesta social requerida por el conflicto con desenlace adverso. Aunque esto pueda darse por sabido, después de todo parece indispensable volver a replantearse la relación entre lucha electoral y lucha política. Conviene volver a observar, allí donde hubo, lo que acarrea el peso de la lógica electoral, peor aun cuando en los hechos se asume los espacios de legalidad sin visualizar sus límites, como si fuera sinónimo de «congruencia democrática», asunto crucial cuando compromete directamente a la izquierda en las

<sup>6</sup> M. Favela y D. Guillén: *América Latina. Los derechos y las prácticas ciudadanas a la luz de los movimientos populares*, CLACSO, Buenos Aires, 2009.

<sup>7</sup> G. Pleyers: *Movimientos sociales en el siglo XXI. Perspectivas y herramientas analíticas*, CLACSO, Buenos Aires, 2018.

coaliciones progresistas. Varios reveses están vinculados a la sobrestimación de la lucha dentro de la institucionalidad del Estado frente a la lucha que se desenvuelve en lo social no estatal.

La experiencia de Venezuela, vista desde el Proyecto Bolivariano, en su tránsito por una senda similar, aunque en un registro diferente por su grado de organicidad, arroja saldos sociales altamente transformadores si consideramos la participación ciudadana y el compromiso político con el proyecto. Este proceso aporta importantes referentes para estudiar los vínculos entre participación popular y poder político, así como la movilización de los recursos de la política para sumar fuerzas y neutralizar los afanes de la derecha. En su desarrollo se puede advertir un giro sustantivo en ese empeño común, unos con mayor visibilidad que otros, de los gobiernos progresistas en la construcción de una nueva ciudadanía con capacidad de politizar su participación desde la sociedad de cara al Estado.

Llegado a este punto es conveniente volver la mirada hacia ese ángulo desde el cual se puede apreciar la distancia entre el discurso y los hechos y para repensar hasta dónde se han transformado los factores que intervienen en las relaciones de poder. Las políticas aplicadas provienen de un campo de disputa entre la esfera mercantil y la esfera pública. Había que encarar a este respecto la disyuntiva entre más consumidores o más ciudadanos, frente a la cual no basta con invocar la emergencia de una nueva pluralidad. El punto pasa por repensar cómo dentro de ese abanico, de riqueza y diversidad social, se va construyendo un sujeto político provistos de una nueva conciencia.

Siendo una conquista importante la aplicación de una política distributiva de la riqueza socialmente generada, lentamente fue quedando claro a la vez que la lucha contra la pobreza y la desigualdad no genera por sí sola una conciencia antineoliberal. Un lugar fundamental de este cambio se ha venido conformando desde las nuevas orientaciones políticas para el uso del excedente. Esto fue importante, aunque no haya indicios sustantivos de cambio en el patrón productivo que siguió atado, por regla general, al ciclo exportador y la demanda externa.

Sin esa cualidad en la construcción de la conciencia, difícilmente las conquistas lograrían ser determinantes para gravitar de modo sustancial en la trayectoria del cambio y, más aún, en la capacidad para defenderlas. Se trata de un dato económico con implicancias políticas,

porque supone mutaciones de fondo en el modo de pensar. Esa dimensión es estratégica, porque supone una confrontación decisiva en el campo de las ideas con las cuales se construye la política. Si esto es así, hay que recapitular el movimiento de las tendencias y contratendencias que se configuran en torno a los grandes objetivos en disputa.

Desde estas preocupaciones hay que volver la mirada hacia Brasil. Importantes intereses aquí han sido derrotados en sendas jornadas electorales desde el 2002 hasta el 2014. La existencia de un nuevo bloque en el ejercicio gubernamental del poder no iba ser fácilmente asimilado por la clase dominante brasileña. Hoy puede verse con cierta nitidez que el cálculo estratégico para instrumentar la involución no ha sido repentino. La derecha sabe que los resortes institucionales fundamentales del Estado y el poder económico están intactos. Maneja con destreza la diferencia entre ganar elecciones y controlar el poder, pero sobre todo sabe leer el movimiento real de la conciencia ciudadana. He aquí un colosal desafío, completamente vigente, para pensar desde la política latinoamericana en la perspectiva de profundizar la comprensión del proceso político regional y sus condiciones. Sus coordenadas conceptuales replantean el debate entre gobierno y Estado, la relación entre coalición electoral y alianza estratégica, la relación entre Estado y sociedad y, en última instancia, la disputa por la hegemonía.<sup>8</sup>

Las nuevas formas que asumen los golpes y las involuciones políticas que acarrearán pueden considerarse, entonces, verdadera pieza para una teoría política contemporánea. En su desenvolvimiento podemos referenciarlos para un mejor análisis que supone el ejercicio de identificar las dimensiones en que se constituye la disputa por la conducción de la política. Su riqueza y los factores movilizables puede incluso anticipar alguna de sus expresiones para abordar procesos y escenarios. Tal sería la experiencia de México bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, AMLO, cuando avanza en el desarrollo de sus políticas y se visualiza la gran problemática que supone transformar la portentosa mayoría electoral —inusitada para nuestro tiempo— y el incuestionable mandato que de allí se deriva en fuerza política para construir y defender las transformaciones comprometidas. Posibilidad de enormes

<sup>8</sup> L. Oliver: *Transformaciones recientes del estado integral en América Latina. Críticas y aproximaciones desde la sociología política de Antonio Gramsci*, Universidad Nacional Autónoma de México/Ediciones La Biblioteca, México, 2016; M. Roitman Rosenmann: *Las razones de la democracia. Poder político, orden social y realidad económica*, Ediciones Sequitur, Madrid, 1998.

proporciones, así como de desafíos de igual magnitud en términos de construir, sumar y articular fuerzas que le otorgue la capacidad para impulsar el cambio que va a depender, más que de un sistema de partidos en crisis, seguramente, en gran medida de la figura del ejecutivo cuyo liderazgo político viene desde mucho antes. El gobierno de la denominada «cuarta transformación» no llega en diciembre de 2018, como a veces se dice, después del «ciclo progresista» en América Latina. Es parte de ese denso flujo transformador frente a un modelo de sociedad en descomposición que, a pesar de la crisis que le aqueja, sigue funcionando como si tuviera una salud de roble. Un eje fundamental, distintivo del programa de gobierno inscrito en el mandato electoral del primero de julio en México, es la lucha contra la corrupción cuya dinámica en todas las esferas de la política y sus instituciones se ha convertido en sistema constitutivo del modelo neoliberal y su reproducción.

Esta forma de colocar el estudio sirve para pensar las experiencias actuales desde un ángulo de preocupación mayor. Porque hoy todos los procesos que se han construido están en peligro, no por el mal llamado «fin de ciclo progresista» o «fin del giro a la izquierda»,<sup>9</sup> sino más bien por ese complejo movimiento de tendencias y contratendencias, de avances y reflujos que se advierten en los procesos de cambio frente a la dominación neoliberal y porque en esa trayectoria haya cambios en las correlaciones tanto en los países como en la región. Tampoco se explica solamente por el impacto adverso de la crisis económica y financiera que cerró la llamada «bonanza primario-exportadora». Tampoco por la política injerencista de EE.UU. que no constituye en sí misma una novedad, sino por lo que está ocurriendo allí donde se produce la reflexión, el diagnóstico político y la acumulación real de fuerzas en la franja progresista y particularmente en el seno de la izquierda.<sup>10</sup> Si nos atenemos a los saldos disponibles, a la manera de un esquemático balance, podríamos decir que el modelo bajo el influjo de políticas progresistas ha experimentado correcciones importantes, pero el núcleo duro del poder neoliberal sigue vivo.

<sup>9</sup> M. Torrico (ed.): *¿Fin del giro a la izquierda en América Latina? Gobiernos y políticas públicas*, FLACSO, México, 2017.

<sup>10</sup> Roberto Regalado: *La izquierda latinoamericana a 20 años del derrumbe de la Unión Soviética*, Ocean Sur, México, 2012; E. Sader: *El nuevo topo: los caminos de la izquierda latinoamericana*, CLACSO/Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 2010.

Los gobiernos que se han conformado con el apoyo de coaliciones de fuerzas diferentes y que al coincidir en la proyección de objetivos programáticos han conseguido imponer su hegemonía justamente cuando sus propuestas obtuvieron, más allá de los escrutinios, consensos movilizados importantes en la sociedad. Es ese el momento de la política cuando la diversidad social, desde su desencanto, enojo o frustraciones acumuladas, logró colocarse en disposición de movimiento y de lucha en un sentido transformador, es decir, con la identificación de sus adversarios, todo lo cual, en su medida y de acuerdo con las características del país, sirvió para los entendimientos, las coincidencias, las coaliciones y las alianzas en la tarea de sumar fuerzas. A su medida, acorde con las circunstancias nacionales, esta colocación en disposición de articulación para el movimiento pertenece a lo que se ha dado en caracterizar como la fase de acumulación antineoliberal. Subyace al dinamismo de este fenómeno político una larga y multiforme experiencia que dibuja un arco de avances sociales que va desde el Caracazo de 1989, pasando por la guerra del agua en Bolivia, la lucha del movimiento sin tierra en Brasil, el levantamiento zapatista del 1994, entre muchas otras expresiones de lucha, hasta ese momento andino de crisis política en que una poderosa rebelión ciudadana produjo la destitución del presidente de Ecuador Lucio Gutiérrez en 2005. Sin este cúmulo de luchas y experiencias sería muy difícil tratar de comprender la conformación de los gobiernos progresistas y el carácter de sus liderazgos.

### **Dialéctica de la acumulación**

En la densidad de ese juego de tendencias y contratendencias, un momento primordial de la acumulación fue aquel en el cual la concertada política regional le puso en diciembre de 2005, en Mar del Plata, un freno a las pretensiones hegemónicas estadounidenses de instalar en todo el continente el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio para las Américas. Notable coyuntura en la que se pudo dimensionar la profundidad del cuestionamiento a las concepciones conservadoras de integración, seguridad y cooperación, fundadas en los valores del mercantilismo neoliberal y la subordinación regional. Las grandes coincidencias construidas a partir de criterios multilaterales, de defensa de la soberanía para el tratamiento de los desafíos

comerciales, políticos y diplomáticos comunes se encuentran plasmadas de allí en adelante en el impulso de propuestas diferentes, como la Alternativa Bolivariana para Nuestra América (ALBA), la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR), el Proyecto del Banco del Sur y el Consejo Sudamericano de Defensa junto con otros proyectos de gran envergadura como PETROCARIBE. A este rediseño estratégico regional pertenece la clausura del puesto militar norteamericano en la Base de Manta por el gobierno ecuatoriano en 2009. Heredera del Grupo de Río, que consolidó su fisonomía con la incorporación de Guyana, Haití y un poco más tarde Cuba, la denominada Cumbre de la Unidad de América Latina y el Caribe, celebrada en la Riviera Maya en 2010, culminó con el consenso de todos los países de la región en la constitución de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) en la Cumbre del 2011.

La experiencia venezolana desde la instalación del gobierno de Hugo Chávez en 1998, pasando por conquistas similares en Bolivia, Argentina, Uruguay y Paraguay, hasta el triunfo del Farabundo Martí en la contienda del 2009, son hitos de un itinerario de referencia para pensar en la articulación de la política progresista. Dos hechos distintos pero significativos en ese proceso de acumulación son el golpe de Estado en el 2002, que fue frustrado por la unidad de las fuerzas del chavismo, y la victoria electoral de Lula ese mismo año en Brasil.

Es la suma articulada de disposiciones sociales lo que explica el movimiento del progresismo y la capacidad política para modificar la situación y que tuvo su ratificación en una cadena de triunfos electorales importantes. Asimismo, cuando se ha perdido esa capacidad de incidir desde lo social en la política, imprimiendo un contenido de lucha a las demandas y las expectativas, las fuerzas que habían construido se fueron resquebrajando o segmentando, debilitando su unidad de movimiento con lo cual las coaliciones y alianzas políticas se tornaron vulnerables.<sup>11</sup> Algo de esto ha sucedido, por ejemplo, en Argentina cuando el peronismo y las fuerzas de izquierda abrieron espacios que no tardaron en propiciar condiciones favorables para su derrota electoral después de 12 años de liderazgo del movimiento kirchnerista. El gobierno del Partido de los Trabajadores, en Brasil,

<sup>11</sup> H. Ouviñas y M. Thwaites Rey (comp.): *Estados en disputas. Auge y fractura del ciclo de impugnación al neoliberalismo en América Latina*, Ediciones desde abajo-Bajo Tierra Ediciones Quimantú-CLACSO, Buenos Aires, 2019.

igualmente se debilitó después de que, desprovisto de la movilización de masas que inicialmente impulsó y que no desarrolló a la altura del conflicto que no dejaba de crecer, en aras de pretender probablemente una base mayor de alianzas políticas con algunas fuerzas de dudosa congruencia, y que no tardaron en desestabilizarlo generando las condiciones para impensados sucesos regresivos.

Estas experiencias contienen la didáctica de que el soporte de las coaliciones para conquistar gobiernos y mantener escrutinios favorables es un proceso coincidente pero diferente al proceso estratégico de acumulación de fuerzas. Esto puede resultar más ilustrativo cuando, como en muchos casos, prevalece el peso de un liderazgo en el campo progresista que por sí solo, más allá de su congruencia y capacidad, no conlleva necesariamente la construcción de un proceso articulado de acumulación desde partidos y movimientos. En ambos niveles, gubernamental y no gubernamental, se dinamizan complejos procesos de disputa en torno a la conquista y la capacidad de defender los procesos de transformación. Legitimar por tanto un gobierno progresista, que cuenta con el consenso de los gobernados, no significa legitimar de antemano los poderes del Estado desde los cuales operan las fuerzas de la clase dominante.

Paraguay, Brasil y Ecuador, siendo procesos diferentes, muestran en su momento de regresión un común denominador. Nos referimos al accionar político de sus respectivos vicepresidentes y el tejido de intereses adversos que representaron en el tablero de las coaliciones de gobierno. Podríamos entender por qué la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos apareció involucrada en el espionaje realizado contra Brasil. También por qué la presidenta Dilma Rousseff, por ese motivo, suspendió su visita de Estado programada a Washington para aquel 23 de octubre de 2013. Sin embargo, desde cualquier punto de vista resulta incomprensible cómo se pudo sostener a un vicepresidente como Temer, desde el 2010, sabiendo tal vez todo lo que representaba desde el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y más allá incluso de esa organización. Para la derecha, el gobierno estadounidense y la Organización de Estados Americanos, después de todo, la destitución de la presidenta de Brasil se produjo dentro del marco constitucional del Estado. Hay momentos en que esa legalidad aparece como garante de toda la sociedad, pero cuando el proceso avanza y los factores del poder advierten amenazas, sus



instituciones no tardan en asumir la defensa de la clase dominante. Definir esa frontera en medio de la confrontación será siempre un desafío para las fuerzas progresistas.

En Paraguay, en la forja del «golpe parlamentario», del 12 de junio de 2012, el vicepresidente Federico Franco no ha sido una figura secundaria si se considera la estrategia de exacerbar o crear conflictos en la disputa política. Tal es el caso, poco discutido, cuando la intención del Pentágono en su afán de asegurar una base en territorio paraguay y la promoción de proyectos para la cooperación en materia de seguridad no contó con la anuencia del gobierno de Lugo. Fue al ministro de defensa Luis Bareiro Spaini a quien le cupo la responsabilidad de encarar aquella delicada situación en cuyo desarrollo se ha visto enfrentado a un juicio político en el que aparecen los indicios del accionar de Liliana Ayalde, la entonces embajadora estadounidense acreditada en Asunción, portadora en esa coyuntura de una larga historia de injerencias y quien conocía de los afanes de la derecha parlamentaria de destituir al presidente. La provocada renuncia de Bareiro fue parte del proceso de desestabilización que incluyó la horrorosa masacre de Curuguaty. Más tarde, el accionar del vicepresidente, otra vez como parte de la trama siniestra del golphismo, adquiere un peso singular cuando su partido, el Liberal Radical Auténtico, se constituyó en impulsor del juicio político que culmina, como es sabido, en el «golpe parlamentario» contra Fernando Lugo.

Un elemental acercamiento a la coyuntura ecuatoriana es suficiente para situarnos de inmediato frente al fenómeno político de la traición. Traición a la mayoría que logró conformarse cuando votó por un candidato que enarboló su campaña electoral como continuador de la Revolución Ciudadana. No se sabe a ciencia cierta cómo se produjo su mutación o si se trata de alguien que siniestramente estuvo agazapado esperando el momento para el zarpazo. De cualquier modo, es un error no haber sabido que esto podía ocurrir. No hay que olvidar que Lenin Moreno durante su campaña ha dado muestras de aparente congruencia con las realizaciones del gobierno de Correa, pero una vez en la presidencia inició sin dilación un giro radical para instrumentar una política completamente diferente. Hoy está más que claro que se trata de restaurar los factores tradicionales del poder político en el Ecuador y garantizar el retorno de la política de Washington en las decisiones fundamentales de la política en el país. De ser así,



¿cuál es el propósito? Varios, pero el más importante es el objetivo estratégico de cerrar el paso a toda opción progresista en Ecuador y de aniquilar a la izquierda en el país. La anulación a Julian Assange de su carta de ciudadanía y el asilo que tenía legalmente en la Embajada Ecuatoriana en Londres es muestra paradigmática de las proyecciones de la traición.

Sea de todo esto lo que fuere, lo cierto es que la conducta del «segundo de abordó» en la función ejecutiva, por sus ligámenes con la derecha y el peso decisivo de los factores externos en la cadena de la dominación se convirtió en un formidable peldaño para escalar la operación de la restauración conservadora dentro de la misma institucionalidad y con sus recursos constitucionales.

Siguiendo el sentido de la línea reflexiva hasta aquí hilvanada, conviene volver a preguntarse sobre el trasfondo de estos procesos recientes de derechización. Los triunfos de estas fuerzas están más relacionados con las debilidades del progresismo que a la consistencia social de sus propuestas antineoliberales. Mayor peso analítico adquieren los errores del progresismo, que las cualidades propias de la derecha. Si se revisa cuidadosamente el contenido de las políticas que comenzaron a aplicar los gobiernos de Brasil, desde el golpe de 2016 y el de Argentina desde el mismo día en se impuso por la mínima de menos de tres puntos porcentuales en las elecciones de 2015, no difieren de las aplicadas durante los claros periodos neoliberales de Fernando Henrique Cardoso y Carlos Saúl Menen, respectivamente. Aunque las ciudadanías de estos países han identificado dramáticamente sus desafíos actuales, no está claro si disponen de las condiciones para remontar en lo inmediato las articulaciones políticas requeridas. Esto explica la arrolladora victoria de la expresión electoral más radical de la derecha agrupada bajo la candidatura de Jair Bolsonaro que constituye un capítulo del golpismo. Si nos atenemos al peso social de las invocaciones ideológicas, la aparentemente desaseada campaña conservadora en favor del orden y el disciplinamiento tuvo una indiscutible eficacia en la conducta electoral frente a esa otra convocatoria construida desde el significado golpista del *impeachment*.

Todo esto ha venido ocurriendo sin necesidad de que la derecha, donde ha llegado al gobierno, se haya visto ante la imperiosa necesidad de ofrecer una plataforma cualitativamente diferente de la que ya hemos conocido frente a los problemas sociales y políticos que cruzan a

nuestros países. Casi sobra decir que el neoliberalismo no ha resuelto ninguno de los problemas que se ha propuesto atender. Su sistema político no ha demostrado capacidad alguna para absorber y resolver los conflictos sociales. A esto se añade una dimensión que, sin ser nueva, en la actualidad adquiere una notable visibilidad: la corrupción gubernamental y política prevaleciente que, por regla general, es apreciada como un engranaje sin el cual su sistema político no puede funcionar.

Sin embargo, a la luz de los resultados disponibles no se puede subestimar su capacidad de rearticulación. En la disputa, que sigue su curso, por la dirección de los procesos no escatima ninguna forma de lucha. El abanico de recursos puede ser muy amplio. Desde el movimiento concertado para activar la maquinaria del fraude y la corrupción hasta el uso combinado de la coerción y la compra de conciencias de segmentos sociales empobrecidos. En el acervo de las experiencias mencionadas se localiza, México 1988 y la reedición del fraude electoral del 2006, el golpe de 2002 en Venezuela, el intento de reversión institucional en Bolivia de 2008 y Ecuador en 2010, las construcciones de ropaje judicial para la inhabilitación política de Lula de 2018, y una cauda de procesos de desestabilización en desarrollo con los peores escenarios. Son todos referentes de los procesos de cambio y sus desafíos democráticos. Es más, estos antecedentes son muestras de la capacidad disponible en el acervo de los recursos institucionales y políticos de la derecha, cuyo accionar encuentra sus correspondientes ligámenes con la disposición coadyuvante y a veces francamente impulsora de la política estadounidense hacia la región.

### **Estados Unidos, Venezuela y Cuba**

El actual mandatario estadounidense cumple satisfactoriamente con todos los requisitos ideológicos de un ejecutivo reaccionario, que explicita de manera asombrosa su voluntad política, generalmente desde posiciones de fuerza, como la construcción de muros, visados discriminatorios, oleoductos contaminantes o apelando a declaratorias de emergencia nacional, y que para llegar a la oficina oval no requirió de un ejercicio democrático fundado en el principio de mayoría. Es difícil encontrar en la historia norteamericana un similar, es decir, otro mandatario que haya enfrentado tanto rechazo durante

su campaña y luego ya bajo su investidura como presidente. Pero hay algo fundamental que no debe desmerecerse: él encarna una estructura de poder, la preferencia de la clase dominante y la confianza del sistema político norteamericano en esta coyuntura.

Casi sobra insistir que el principal objetivo de la actual administración es encarar la crisis de hegemonía para recuperar la primacía de Estados Unidos. Ello supone el reordenamiento de su dominación global, que no se instrumenta obviamente desde las normas de convivencia internacional, ni desde el respeto por los acuerdos multilaterales de cooperación que son considerados simplemente un obstáculo. Su prioridad consiste en doblegar a China para lograr la apertura del mercado asiático en favor de los bancos y proveedores estadounidenses, así como reforzar la preponderancia de Wall Street. La proclama de preparar a Estados Unidos para «ganar guerras» y la sistemática exhibición de su poderío bélico tienen como destinatario a todas las franjas del mundo que no se subordinan o que mantienen un sentido de independencia frente a sus propósitos y políticas. *America first* quiere decir *Only America*. Significa que solo ella puede ser portadora de los intereses del capitalismo global. Esa base ideológica le sirve de sostén para atribuirse el derecho de intervenir, directa o indirectamente, allí donde sus intereses se consideran amenazados, sin que importe, por supuesto, la índole de los convenios multilaterales comprometidos ni las leyes internacionales.<sup>12</sup>

Desde tales propósitos hay que entender su preocupación por Rusia en la competencia estratégica que viene desde mucho antes, habida cuenta de sus complejas implicancias geopolíticas. Su agresión a Siria hace parte de esa pretensión y se vincula con su afán de reforzar una estrategia de alianza explícita con Turquía, cuya posición no le allana el camino deseado, así como con Arabia Saudita e Israel que son sus acompañantes en la misma senda, sin perder de vista el empeño declarado por generar el desarme atómico de Irán, Corea del Norte y la pretensión arrogante de subordinar a Europa a través de un mayor financiamiento de la OTAN. Es en este encuadre, obligadamente apretado, el lugar analítico donde hay que estudiar la estrategia estadounidense y sus alternativas cuando se debate entre sus pretensiones

<sup>12</sup> J. Hernández Martínez: «Rearticulación del consenso y la cultura política en Estados Unidos. Reflexiones e hipótesis sobre la «era Trump»», en C. Castorena *et al.* (coord.) *Estados Unidos contra el mundo. Trump y la nueva geopolítica*, CLACSO-Siglo XXI Editores, México, 2018.

hegemónicas globales fundadas en la visión unipolar frente al desenvolvimiento inexorable de un diseño multipolar en curso.<sup>13</sup> Esta pugna, que es mucho más que un conflicto entre visiones, no tiene un desenlace predecible, lo cual no significa que no pueda ser estudiada, porque estamos ante un proceso que anticipa tendencialmente la conformación de varios polos provistos de determinados poderes de decisión.

¿Tiene que ver todo este movimiento de fuerzas y reposicionamiento ideológico con América Latina y el Caribe? Más allá de las apariencias y el contenido explícito de los documentos oficiales, sí tiene que ver y mucho. En lo más inmediato resulta benéfico para la región todo contrapeso frente el hegemonismo norteamericano, pero no estamos ante una disyuntiva que supondría hipotecar soberanía, desarrollo y seguridad. Además, por el peso de la historia habremos de considerar que Estados Unidos nunca ofrece retribuciones significativas a cambio de la simple adhesión subordinada. El endurecimiento de la política estadounidense confirma la continuidad de que nuestra región sigue siendo un escenario en disputa. Venezuela vive y padece diariamente el resultado de ese choque. Cuba por su lado experimenta el retroceso de la tímida, aunque importante herencia de Obama, por el redoblado bloqueo y las amenazas que se extienden explícitamente hasta Nicaragua. La actual administración norteamericana se ha empeñado por convertir a México en una experiencia didáctica sobre cómo se puede controlar la inmigración y renegociar desde la asimetría los convenios comerciales. No obstante el ligero cambio de tono después del triunfo de AMLO y ante la reorientación distante de la subordinación de su política exterior, esa pretensión se mantiene vigente.

Someter a Cuba es parte de una antigua historia en el registro de los objetivos de la política norteamericana, en cuyo itinerario la ocupación ilegal de la base naval de Guantánamo es una muestra muy elocuente. No es este el lugar para revisar cómo esa pretensión se vuelve historia contemporánea desde Eisenhower hasta Trump, doce sucesivas administraciones que han sido congruentes en la aplicación de sanciones económicas, comerciales y financieras, acordes con una política constante de agresión ideológica, militar y mediática. Una verdadera guerra que combina todo tipo de acciones, abiertas y encubiertas, con el

<sup>13</sup> G. Pérez-Gavilán et al. (coord.): *La geopolítica del Siglo XXI*, Universidad Autónoma Metropolitana, México, 2017.

propósito de aislar a Cuba y el objetivo estratégico de doblegar el sentido de autodeterminación en que se sustenta su sistema político desde el triunfo de la revolución.<sup>14</sup>

En Venezuela el golpismo intenta articular el despliegue de todas las formas de lucha, bajo el objetivo de complementar el sabotaje de la economía, el desabastecimiento inducido con violencia callejera y provocaciones diplomáticas. Ante la fragilidad de la oposición interna para articular una estrategia consistente, en todo ello la iniciativa estadounidense resulta crucial. El gobierno bolivariano resiste con maniobras institucionales, desde una lectura cuidadosa de los acontecimientos y con el uso balanceado de los recursos políticos disponibles a la medida de las correlaciones, los cambios en la situación y las tácticas de la agresión evitando la confrontación directa. Pero todo indica que la situación de guerra persistirá, parte de la son la aplicación unilateral de sanciones económicas y las medidas de bloqueos que afectan severamente la economía del país.

El interés norteamericano sobre Cuba conlleva una dimensión hemisférica. Eso explica por qué el recrudecimiento del bloqueo a Cuba se produce en un contexto de ataque frontal a la soberanía y la institucionalidad de Venezuela. La mirada de inspiración monroísta se encuentra plenamente reinstalada. En efecto, en la argumentación oficial China y Rusia están comprometidas con la «dictadura» en Venezuela y buscan expandir —se dice— los vínculos militares y la venta de armas en toda la región. Los Estados democráticos del hemisferio —es decir, aquellos que hacen de la subordinación la forma de cooperación— tienen un interés compartido en enfrentar las amenazas a su soberanía.<sup>15</sup> En la misma cita de marras se afirma que en Venezuela y Cuba, los gobiernos se aferran a modelos autoritarios izquierdistas anacrónicos —la traducción es nuestra— que continúan engañando a su pueblo. Que las invocaciones construidas carezcan de verificabilidad no importa mucho. La importancia estriba en que anticipan una decisión en la conducta de la política estadounidense. Es así como bajo el argumento de la «injerencia» cubana en Venezuela, tampoco comprobada, Estados Unidos aprovecha para realinear el campo de sus incondicionales bajo la estrategia de recuperar incidencia

<sup>14</sup> R. Sánchez-Parodi: *Cuba-USA. Diez tiempos de una relación*, Ocean Sur, México, 2011.

<sup>15</sup> The White House: *National Security Strategy*, Office of the Press Secretary, Estados Unidos, 2017, p. 51. Fecha de consulta 22 de mayo de 2019.

política en aquella franja de países que se resisten a su hegemonía hemisférica. El recurso argumental contiene las huellas de las pretensiones hegemónicas, por lo que en estricto sentido no constituye una novedad. A contrapelo de lo que ocurre bajo el influjo del chavismo que permite una mejor comprensión del proceso revolucionario cubano, en la narrativa del norte se busca construir la imagen de una isla sin futuro, en bancarota, que no hace más que exportar su experiencia y otro «régimen represivo», «cubanizando el chavismo» para boicotear el sentido de la solidaridad entre países y pueblos.<sup>16</sup> La prolongación de esa línea desvirtuadora de los procesos de integración explica la realineación de fuerzas impulsada por la OEA que aparece bajo el llamado Grupo de Lima que, sin ser estrictamente homogéneo, ha realizado una labor de coro diplomático funcional a los requisitos de la desestabilización y la intervención contra Venezuela promovida por Estados Unidos.

El trabajo bilateral que condujo hacia la reanudación de las condiciones para la normalización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba siempre estuvo presente la agenda hemisférica. Desde el interés norteamericano esto ocurrió sobre la base del reconocimiento de una política que ha fracasado en su intento por cambiar el régimen de Cuba y todo lo que ello pudiera representar para su hegemonía en la región.

Al inicio del llamado «deshielo» en las relaciones bilaterales, subyace el reconocimiento de que ha cambiado aquella histórica relación de normalidad fundada en la subordinación de la región hacia Estados Unidos. A pesar de la reticencia implícita de Estados Unidos, los gobiernos latinoamericanos y caribeños lograron concretar consensualmente la invitación al gobierno cubano para participar en la VII Cumbre de las Américas realizada en abril de 2015 en la ciudad de Panamá. Se ratificaba en aquel momento algo que ya venía sucediendo y que rubricaba el pleno reconocimiento de Cuba como miembro de la comunidad hemisférica.

En la decisión de Obama estaba presente la posibilidad de que cambiando su política podría, por otros caminos, retomar el rumbo de sus objetivos estratégicos tanto hacia la isla como hacia el hemisferio en su conjunto. Bajo el ropaje de la transición se reactualizan

<sup>16</sup> G. Sánchez Otero: «Fidel, Chávez y el destino de nuestra América», en: J. Saxe-Fernández (coord.): *Yo soy Fidel. Pensamiento y legado de una inmensidad*, CLACSO, Buenos Aires, 2018, p. 174.

tales objetivos, ahora bajo los criterios de la política de Trump. Aunque existe una agenda, en el campo de las opciones actuales no están todas las deseadas. Tampoco las posibles, ni siquiera desde el más puro realismo político.<sup>17</sup> Más allá de los documentos disponibles y sobre todo en atención a la conducta seguida, parece difícil sostener que para la actual administración Cuba se encuentre en un lugar de baja prioridad dentro de su política. La complejidad de la relación en esta coyuntura, aunque los tiempos han cambiado, no aparece desprovista del peso que aporta la historia de la relación.

Entre el 2016 y 2017, diplomáticos estadounidenses fueron, supuestamente, víctima de ataques sónicos que han provocado, también supuestamente, daños cerebrales permanentes. Estupefacta, la opinión pública tomó nota del llamado *Sonic attack* después de que el Departamento de Estado revelara esa increíble forma de agresión. Así como las armas de destrucción masiva en tiempo de Saddam Hussein jamás pudieron ser corroboradas, aquí tampoco la cooperación profesional entre ambos gobiernos ni la investigación científica nunca pudo descubrir lo que ocurrió. Sin embargo, los congresistas cubano-americanos fueron muy oportunos para generar ante aquel episodio una corriente de opinión dirigida hacia la revisión de las relaciones heredadas de la administración anterior, incluso algunas formulaciones apuntaron hacia la ruptura de relaciones diplomáticas. Con el episodio quedó construido el primer peldaño para la reversión. Invocando medidas de seguridad se puso en marcha la decisión de reducir la presencia diplomática y consular norteamericana en La Habana y correlativamente se impuso la del personal de Cuba en Washington.

La tónica del nuevo periodo resultaba inequívoca. Aun así, la respuesta del gobierno cubano ha sido notable por su moderación, al tiempo que reiteraba su disposición de dialogar y cooperar con EE.UU. en asuntos de interés mutuo, y de seguir negociando sobre otros temas de interés bilateral. Luego vendrá el discurso del Presidente Trump del 16 de junio de 2017 en Miami, teñido de un lenguaje ofensivo a la política cubana, que tuvo el significado de una misión cumplida en atención a su promesa de campaña con el anuncio de su nueva política orientada a detener la opción de ampliar la cooperación construida. El

<sup>17</sup> Jorge I. Domínguez: «Opciones para las relaciones entre Cuba y Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump». *IdeAs* [en línea], 10 | Otoño 2017 / Invierno 2018, publicado el 19 de diciembre de 2017, accedido el 29 de mayo de 2019. En: <http://journals.openedition.org/ideas/2139>; DOI: 10.4000 / ideas.2139.



avance de la contraofensiva retoma la ley Helms-Burton con la aplicación del Título Tercero, de agresivo alcance en cuanto a su extraterritorialidad. La pretensión del instrumento es imponer su juridicidad en Cuba, transgrediendo principios según los cuales el dominio de propiedad, de inversión o financiamiento corresponden soberanamente a las leyes del país. En virtud de la aplicación del mencionado título se busca otorgar legalidad a los antiguos propietarios en Cuba, así como a sus herederos, para entablar demandas en tribunales de Estados Unidos. Por extensión las demandas podrían exigir compensaciones a empresas de terceros países cuyos negocios en la isla utilicen inmuebles sin importar que hayan sido nacionalizados o confiscados al amparo de la legislación correspondiente. Es difícil proyectar lo que ocurriría si prosperan las demandas en las cortes estadounidenses. En cualquier caso, puede anticiparse un daño aún más grave a la economía cubana si al actual embargo se añadiera el impacto de inhibir la inversión de capital compartido de terceros países. Mientras tanto, las estadísticas disponibles registran en la economía cubana una pérdida estimada equivalente a 633 600 millones de dólares a la economía cubana por efecto del bloqueo de casi seis décadas.

Estas medidas, por su carácter coercitivo y unilateral, son similares a las que se vienen aplicando contra Venezuela. Aquella Orden Ejecutiva de Obama suscrita en marzo del 2015 es equivalente a una declaración de guerra. ¿Por qué? Porque se ha calificado no al país al que se refiere, sino a la Revolución Bolivariana, como una «amenaza inusual y extraordinaria a la Seguridad Nacional de Estados Unidos». Como es sabido esa orden fue ratificada un año después y por esa misma senda hará lo suyo la agresión de Trump y su Orden Ejecutiva 13808 de agosto de 2017, la 13827, la 13835, la 13850, todas durante el 2018, así como la 13857 de enero de 2019 que producen, en registros distintos, agudos daños a la economía y las finanzas. El campo de afectación es de amplio espectro, prohibiendo al sistema financiero norteamericano y sus filiales internacionales realizar operaciones desde o hacia Venezuela. Estas prohibiciones, entre otras derivadas de los decretos, producen una cadena de agresión que se traduce en sensibles obstáculos para la disposición de divisas, lo cual conlleva una enorme crueldad cotidiana, toda vez que limitan severamente la adquisición de insumos fundamentales, como hospitalarios, productos farmacéuticos, medicamentos y, en general, el suministro de alimentos de primera



necesidad que no se producen en el país. La acumulación de necesidades básicas insatisfechas y los elementos contruidos para el diagnóstico de una «catástrofe social», encuadradas bajo el impacto de las sanciones, producen las referencias para promover la intervención bajo ropaje humanitario. Estos procesos, en curso, sugieren el desarrollo de una estrategia cuidadosamente concebida.<sup>18</sup> Después de instrumentar el cerco económico, financiero y comercial contra Venezuela la maquinaria mediática construye la acusación dirigida a responsabilizar al gobierno del desabastecimiento y otras causas que en su conjunto van justificando la intervención por «razones humanitarias».

A tales decisiones y maniobras promovidas por Estados Unidos se articula toda una política de agresión multidimensional con el propósito de derrocar al gobierno y aniquilar al chavismo. Aquí, al igual que contra Cuba, la administración norteamericana ha reconstituido la argumentación en favor de los «derechos humanos» y la «democracia». La arremetida descansa en un discurso antidictatorial centrado en el presidente Nicolás Maduro, cuya autoridad legal se busca deslegitimar con la autoproclamación de Juan Guaidó en calidad de «presidente encargado» de Venezuela al que el gobierno estadounidense le ha otorgado su reconocimiento.

En Venezuela se han puesto en práctica casi todos los experimentos para un cambio de régimen. Desde el intento de varios golpes de Estado, pasando por el de un magnicidio, la intervención bajo ropaje de «ayuda humanitaria», hasta la estrategia de un ensayo de levantamiento con desertión de mandos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el accionar combinado de grupos paramilitares. Las autoridades norteamericanas han afirmado en reiteradas ocasiones que sobre la mesa están consideradas todas las opciones políticas, incluso las variantes de una intervención militar.

### **A manera de cierre**

Nuestra región es la franja del planeta donde se encuentra domiciliado el mayor número de intervenciones estadounidenses. Su frontera sur, ha sido y sigue siendo considerada de hecho una suerte de

<sup>18</sup> P. Curcio Curcio *La mano visible del mercado. Guerra económica en Venezuela*, Ediciones MinCI, 2da. ed., Caracas, 2017.

prolongación de su territorio. El concepto de «patio trasero» se encuentra completamente ratificado en la índole de sus decisiones en materia de política migratoria, comercial, de seguridad y la ofensiva formulación reiterada para la construcción del muro fronterizo. La prolongación de ese concepto adquiere agresivas dimensiones geoestratégicas cuando apunta hacia la necesidad de incidir en la trayectoria de la política en nuestros países y desde luego en relación a la importancia que para su seguridad adquiere los recursos naturales como el petróleo, el gas y los recursos de la biodiversidad. Más allá de cualquier ámbito de concreción, lo que encierra esa proyección es elemento constitutivo de un expediente de regularidad que no se puede desligar de la actual contraofensiva de sometimiento, desestabilizadora y golpista contra aquellos procesos y gobiernos que han diseñado sus proyectos nacionales y regionales sin el consentimiento de la política norteamericana.

El endurecimiento de la política estadounidense bajo la actual administración es un referente de análisis que sirve para hipotetizar, de manera plausible, que estamos en la continuidad de los objetivos estratégicos en pugna y ante un escenario hemisférico y global en disputa. Los intereses atrincherados en las estrategias desestabilizadoras y golpistas intentan articular la iniciativa política bajo el despliegue de todas las formas de lucha, recurriendo al sabotaje de la economía con violencia callejera, los recursos institucionales del poder, el uso incluso bajo formas de chantaje político de las asimetrías históricas en la relación Norte-Sur y las provocaciones diplomáticas concertadas entre gobiernos de derecha, la OEA y el llamado Grupo de Lima. Destaca en ese cuadro el gobierno bolivariano y sus fuerzas políticas, que resisten desde una lectura cuidadosa de los acontecimientos, tratando de considerar la medida exacta de las correlaciones y los cambiantes desafíos. Pero la situación de guerra persiste y el resultado de sus batallas son un asunto vital para el futuro de América Latina y el Caribe.